



Asamblea General

Distr. general
16 de febrero de 2012
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo I (Contratación Pública)
21º período de sesiones
Nueva York, 16 a 20 de abril de 2012

Revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno que acompañará a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública**

Nota de la Secretaría

Adición

En la presente adición se enuncia una propuesta de texto para la Guía que acompañará desde el artículo 1 hasta la primera parte del artículo 7 del capítulo I (Disposiciones generales) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública.

* Publicado nuevamente por razones técnicas el 21 de mayo de 2012.

** Este documento se ha presentado menos de diez semanas antes de la apertura del período de sesiones debido a la necesidad de concluir las consultas oficiosas entre períodos de sesiones sobre las disposiciones pertinentes del proyecto de revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno.



GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO INTERNO DE LA LEY MODELO DE LA CNUDMI SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Comentario artículo por artículo

Artículo 1. Ámbito de aplicación [\[hyperlink**\]](#)**

1. El artículo 1 tiene por objeto delimitar el ámbito de aplicación de la Ley Modelo. La Ley Modelo abarca la adjudicación de todo tipo de contratos, de acuerdo con la definición de contratación pública que figura en el artículo 2 del texto. La gran diversidad de procedimientos que prevé la Ley Modelo para regular los distintos tipos de situaciones que pueden darse en la contratación pública hace que sea innecesario excluir la aplicación de la Ley Modelo a cualquier sector de la economía de un Estado promulgante. En el texto de la Ley Modelo figuran varios artículos con los que se pretende regular concretamente la contratación en relación con temas delicados, como la contratación con información de carácter reservado. (Sobre las cuestiones relativas al alcance de la Ley Modelo y las exenciones de la aplicación de las disposiciones sobre transparencia en tales circunstancias, véase el análisis general que figura en el comentario sobre los artículos [** de la Ley Modelo](#) y también los párrafos [** de las observaciones generales \[\\[**hyperlinks**\\]\]\(#\)](#)]

Artículo 2. Definiciones [\[hyperlink**\]](#)**

2. La finalidad del artículo 2 es definir de entrada los términos y conceptos que se emplean repetidamente en la Ley Modelo, a fin de facilitar la lectura y la comprensión del texto. El comentario sobre este artículo se complementa con un glosario, que figura en [\[el anexo \[** de\\]\]\(#\) la Guía \[\\[**hyperlink**\\]\]\(#\)](#), en el que se describen términos a los que tal vez no pueda darse una definición jurídica exacta, pero que son habituales en el léxico empleado en el ámbito de la contratación pública; se examinan también términos que en la Ley Modelo pueden tener un significado distinto al que se le da en otros instrumentos internacionales o regionales de reglamentación de la contratación pública.

3. La definición de “subasta electrónica inversa” (definición [d \[\\[**hyperlink**\\]\]\(#\)](#)) abarca todas las características principales de una subasta inversa, en particular su carácter informático. Esta amplia definición tiene por objeto poner de relieve que la Ley Modelo no regula otros tipos de subastas, aunque algunos Estados puedan recurrir a ellas en sus prácticas de contratación pública, ya que la CNUDMI decidió no contemplar ningún otro tipo de subasta, como se explica en el comentario que figura en la introducción del capítulo VI de la Ley Modelo [\[**hyperlink**\]](#).

4. La referencia al término “adquisición”, que figura en la definición de “contratación” (definición [j \[\\[**hyperlink**\\]\]\(#\)](#)) pretende abarcar la compra y el arrendamiento o el arriendo financiero, con o sin opción a compra. La definición se refiere también a bienes, obras y servicios, aunque la Ley Modelo no requiere una clasificación estricta de lo que constituyen bienes, obras y servicios ya que no se prevén métodos distintos de contratación según se trate de unos u otros. En la Ley

Modelo se utiliza la expresión “el objeto de la contratación” para referirse a lo que ha de ser contratado, también porque a menudo no es posible establecer una diferenciación estricta entre bienes, obras o servicios. No obstante, como ya se explicó en el comentario sobre la sección I del capítulo II de la Ley Modelo [\[**hyperlink**\]](#), algunos métodos de contratación previstos en la Ley Modelo pueden resultar más apropiados, por ejemplo, para la contratación de servicios que para la contratación de bienes y obras. Los Estados promulgantes pueden haber utilizado tradicionalmente una clasificación estricta de elementos que sirva de orientación general. En un ejemplo utilizado en una versión anterior de la Ley Modelo se exponía que, normalmente, se entiende por “bienes” “los objetos de cualquier índole, inclusive las materias primas, los productos, los bienes de equipo, otros objetos en estado sólido, líquido o gaseoso y la electricidad, así como los servicios accesorios al suministro de esos bienes, siempre que el valor de estos servicios accesorios no exceda del de los propios bienes, mientras que por “obras” se entienden todos los trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación o renovación de edificios, estructuras o instalaciones, como la preparación de terreno, la excavación, la construcción, la edificación, la instalación de equipo o materiales, la decoración y el acabado, así como los servicios accesorios a esos trabajos, como la perforación, la labor fotográfica y la fotografía por satélite, los estudios sismológicos y otros servicios similares estipulados en el contrato a que se refiere la adjudicación, siempre que el valor de esos servicios no exceda del de las propias obras. Los “servicios” pueden, pues, clasificarse como “cualquier objeto de contratación que no sean bienes ni obras”. Si el Estado promulgante deseara mantener ese enfoque en la clasificación, la entidad adjudicadora u otro órgano similar deberá velar porque la ley se adapte para permitirlo y por que la clasificación esté a disposición de todos los posibles usuarios del sistema.

5. Las referencias en plural a los términos “contratos” y “proveedor(es) o contratista(s)” en la definición del término “contrato(s) de compras” (definición k) [\[**hyperlink**\]](#) tienen por objeto abarcar todo contrato parcial, fraccionado o similar que se adjudique en el curso de un mismo procedimiento. Por ejemplo, el artículo 39 g) de la Ley Modelo [\[**hyperlink**\]](#) dispone que los proveedores o contratistas podrán presentar ofertas respecto de una porción o fracción de un contrato adjudicable. En tales situaciones, el procedimiento de contratación no culminará con la adjudicación de un único contrato a un único proveedor o contratista sino con la concertación de varios contratos con varios proveedores o contratistas. Las palabras “a raíz de un proceso de contratación”, en la misma definición, tienen por objeto abarcar los contratos adjudicados que se hayan concertado en virtud de un procedimiento de acuerdo marco, pero no los acuerdos marco en sí.

6. La expresión “información reservada”, que figura en la definición de “adjudicación de contratos con información reservada” (definición l) [\[**hyperlink**\]](#) pretende abarcar la información declarada reservada o no divulgable en virtud de la legislación pertinente de un Estado promulgante. En muchos Estados, el concepto de “información reservada” se entiende como la información de acceso restringido en virtud de las facultades conferidas por ley a determinadas categorías de personas. La necesidad de tratar este tipo de información en la contratación puede plantearse no solamente en los sectores en los que suele encontrarse habitualmente este tipo de información, como en el de la seguridad y la

defensa nacional, sino también en otros sectores en los que la ley permita que determinada información no sea divulgada, como en el sector de la salud (por ejemplo, cuando se trate de investigaciones y experimentos médicos de carácter delicado). Este concepto se emplea en las disposiciones de la Ley Modelo que prevén medidas especiales de protección de este tipo de información, en particular excepciones a la obligación de divulgación y a los requisitos de transparencia. En vista del riesgo de que se abuse de tales excepciones previstas en las disposiciones, la Ley Modelo no otorga a la entidad adjudicadora ningún poder discrecional para ampliar el alcance de lo que se entienda por “información reservada”, y se recomienda que todo lo relativo al tratamiento de la “información reservada” se regule por ley a fin de que el poder legislativo pueda ejercer debidamente su control. La definición, cuando se emplea en la Ley Modelo, se complementa con el requisito del artículo 24 de que en el expediente del proceso de contratación se consignen las razones y las circunstancias en las que la entidad adjudicadora se haya basado para justificar las medidas y los requisitos impuestos durante el procedimiento de contratación para amparar la información reservada.

7. Respecto de la definición de “entidad adjudicadora” (definición n) [**hyperlink**]), la Ley Modelo pretende regular principalmente la contratación a cargo de dependencias gubernamentales y de otras entidades y empresas del sector público. Esas entidades variarán de un Estado a otro en función de las diferencias en la distribución de competencias legislativas entre los distintos niveles de gobierno. Así, en el inciso i) del apartado n) en el que se define la “entidad adjudicadora” [**hyperlink**], se presentan opciones sobre los niveles de gobierno abarcados. Según la variante I entraría en el ámbito de la Ley Modelo todo departamento, organismo, órgano u otra dependencia administrativa a nivel central, provincial, local o de cualquier otra subdivisión del Estado promulgante. Esta variante sería adoptada por los Estados no federales y por los Estados federales que puedan legislar para sus subdivisiones territoriales. La variante II sería adoptada por los Estados que promulgaran la Ley Modelo únicamente respecto de los órganos de su administración central. Conforme al inciso ii) del apartado n), el Estado promulgante podrá hacer extensivo el régimen de la Ley Modelo a determinadas entidades o empresas que no se consideren parte de la administración pública [**hyperlink**] si tiene algún interés en extender la aplicación de ese régimen a la contratación que realicen esas entidades en virtud de la Ley Modelo. Para decidir cuáles son las entidades a las que hará aplicable, en su caso, ese régimen, el Estado promulgante podría tomar en consideración factores como los siguientes:

- a) que la Administración aporte fondos considerables a la entidad adjudicadora, garantice de alguna forma los pagos de la entidad relacionados con el contrato adjudicado o respalde de algún otro modo las obligaciones contraídas por la entidad en virtud de ese contrato;
- b) que la Administración gestione o controle esa entidad o participe de algún modo en tal gestión o control;
- c) que la Administración haya concedido a la entidad una licencia exclusiva, un monopolio o un cuasimonopolio para la venta de ciertos bienes o servicios;
- d) que la entidad adjudicadora haya de rendir cuentas de su rentabilidad a la Administración o al tesoro público;

e) que sea aplicable al contrato ofrecido por esa entidad algún acuerdo u otra obligación internacional de ese Estado;

f) que la entidad adjudicadora haya sido creada por alguna medida legislativa especial para el cumplimiento de alguna función prescrita por la ley o que el régimen aplicable a la contratación pública sea por algún otro motivo aplicable a los contratos concertados por esa entidad.

8. La contratación pueden llevarla a cabo grupos o consorcios de entidades adjudicadoras, inclusive de diversos Estados, que pueden considerarse colectivamente como única “entidad adjudicadora”. Así, la definición de “entidad adjudicadora”, con especial referencia a una “agrupación [de departamentos, organismos, órganos y otras dependencias o subdivisiones administrativas]”, sin ninguna indicación de una asociación con un determinado Estado, tiene por objeto dar cabida a esos grupos o consorcios, incluso en el contexto de la contratación transnacional. En algunos países, por razones de responsabilidad política, incluso cuando exista una agrupación de entidades adjudicadoras, una de ellas habrá de ser la entidad adjudicadora principal. En un consorcio internacional, es habitual que la entidad adjudicadora de un determinado Estado actúe como entidad adjudicadora principal y como mandataria de las entidades de otros Estados¹.

9. La definición de “políticas socioeconómicas” (definición o) [**hyperlink**]) no pretende ser general sino que se refiere únicamente a las políticas enunciadas en el derecho interno del Estado promulgante o en los reglamentos sobre las adquisiciones, así como las políticas adoptadas en virtud de normas internacionales, como las medidas antiterroristas o los regímenes de sanciones decretados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La finalidad de las disposiciones es asegurar que las políticas socioeconómicas a) no sean determinadas por la entidad adjudicadora en función de cada caso, y b) sean aplicables a todo contrato adjudicado por entidades públicas, a fin de que su costo y sus ventajas sean verificables. De conformidad con el derecho aplicable en un Estado promulgante, la adopción de políticas socioeconómicas puede ser competencia de uno o varios órganos de dicho Estado. Las normas que rijan la aplicación de tales políticas deberían imponer las debidas limitaciones a las entidades adjudicadoras, concretamente prohibiendo la adopción de políticas a discreción de la entidad adjudicadora en función de cada caso; tales políticas pueden dar lugar a abusos y malas prácticas, por ejemplo mediante el favoritismo.

10. Al final de la definición de “políticas socioeconómicas”, se da al Estado promulgante la opción de enunciar una lista de las políticas socioeconómicas aplicables. En la sección ** del comentario general [**hyperlink**] figura un análisis de los tipos de políticas que se han encontrado en la práctica, que podría utilizarse como base para la elaboración de esa lista. Conviene señalar que esas políticas evolucionan con el tiempo y que, aunque la lista pretenda ser exhaustiva, perderá actualidad. Se recomienda, por tanto, que la lista tenga un carácter ilustrativo, a fin de no tener que actualizar la ley cada vez que cambien las políticas socioeconómicas del Estado promulgante.

¹ El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si las dos últimas frases deberían figurar en la Guía.

11. La definición de “convocatoria” (definición p) [\[**hyperlink**\]](#) tiene la finalidad de diferenciar la “convocatoria” de la “invitación para participar en algún proceso de adjudicación”. Este último concepto tiene un alcance más amplio y puede abarcar también la invitación a la precalificación (en virtud del artículo 18) o la invitación a la preselección (conforme al artículo 49). El significado del término “convocatoria” es distinto en cada método de contratación: en la licitación la convocatoria es una invitación a presentar ofertas (en una licitación abierta y en dos etapas la invitación es pública, mientras que en una licitación restringida la invitación va dirigida a un grupo limitado); en un procedimiento de solicitud de propuestas, la convocatoria es una invitación a presentar propuestas (que puede ser pública o estar dirigida a un grupo limitado); en la negociación competitiva, la convocatoria es una invitación dirigida a un grupo limitado para que participe en negociaciones; en la solicitud de cotizaciones, la convocatoria es una solicitud que se envía a un grupo limitado de por lo menos tres proveedores; en las subastas electrónicas inversas que constituyen el método de contratación en sí, y en las que se solicitan ofertas iniciales a fin de evaluar su conformidad, la convocatoria empieza con una invitación a presentar ofertas iniciales (la invitación es pública, al igual que en la licitación abierta); en subastas electrónicas inversas más sencillas que constituyen el método de contratación en sí, pero en las que no se hace una evaluación de ofertas iniciales, la convocatoria tiene lugar después de la apertura de la subasta, cuando se pide a los participantes que hagan sus ofertas; en una contratación con un solo proveedor, la convocatoria es una solicitud dirigida a un único proveedor o contratista a fin de que presente una cotización o una propuesta. Los conceptos de convocatoria “abierta” y “directa” se explican en el glosario, en el anexo [** \[**hyperlink**\]](#) y en el comentario de la sección II del capítulo II [\[**hyperlink**\]](#).

12. La definición de “pliego de condiciones” (definición q) [\[**hyperlink**\]](#) es genérica y abarca los rasgos esenciales de los documentos mediante los cuales se solicita la participación en cualquier método de contratación. Esos documentos los expide la entidad adjudicadora y en ellos se enuncian las condiciones y los requisitos para una determinada contratación. En algunos métodos de contratación se emplea la expresión “pliego de condiciones” mientras que en otros se usa otra terminología. Por ejemplo, en las disposiciones de la Ley Modelo que regulan el procedimiento de solicitud de propuestas se habla de la “solicitud de propuestas” en la que figura la información relativa a la convocatoria. Independientemente del término o expresión que se utilice en cada método de contratación previsto en la Ley Modelo, el pliego de condiciones engloba también cualquier enmienda que se haga en los documentos inicialmente emitidos. Tales enmiendas pueden realizarse de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley Modelo; en la licitación en dos etapas, también de conformidad con el artículo 48 4); y en el método de la solicitud de propuestas con diálogo, de conformidad con el artículo 49.

13. Si bien en la Ley Modelo se hace referencia a la “garantía de la oferta” (definición u) [\[**hyperlink**\]](#), esa mención no implica que este tipo de garantía solamente pueda solicitarse en procedimientos de licitación. La definición tampoco debe dar a entender que la entidad adjudicadora podrá exigir más de una garantía en un único proceso de adjudicación por el mero hecho de haberse previsto la presentación de propuestas u ofertas revisadas. Como se explica en el comentario sobre el artículo 17 en el que se aborda la garantía de la oferta, el artículo en sí no

prohíbe múltiples garantías. No obstante, se explica por qué la CNUDMI desalienta las múltiples garantías de una oferta en todo procedimiento [\[**hyperlink**\]](#).

14. La expresión “otra norma aplicable de este Estado”, empleada en el artículo 2 y en otras disposiciones de la Ley Modelo [\[**hyperlink**\]](#), no se refiere únicamente a las leyes sino también a los reglamentos dictados para su aplicación y a las obligaciones dimanantes de cualquier tratado en el que sea parte el Estado promulgante. En algunos Estados, bastaría con una referencia genérica a “la legislación” para referirse a las mencionadas fuentes de derecho. En otros tal vez convenga hacer una remisión expresa a cada una de esas fuentes de derecho para que quede claro que no se hace referencia únicamente a las leyes.

Artículo 3. Obligaciones internacionales de este Estado en materia de contratación pública (y acuerdos entre unidades territoriales autónomas (del mismo)) [\[hyperlink**\]](#)**

15. La finalidad de este artículo es explicar el efecto que tienen los tratados internacionales en la aplicación de la Ley Modelo a nivel nacional. El Estado promulgante puede haber contraído, en virtud de algún acuerdo internacional, obligaciones relativas a la contratación pública. Por ejemplo, algunos Estados son partes en el [\[Acuerdo de la OMC sobre Contratación Pública \[\\[**hyperlink**\\]\]\(#\)](#), y los Estados miembros de la Unión Europea están obligados por las directivas sobre contratación pública aplicables en todo su ámbito geográfico. De modo parecido, los miembros de agrupaciones económicas regionales en otras partes del mundo habrán de aplicar las directivas de contratación pública de su respectiva agrupación. Además, muchos institutos de crédito internacionales y organismos nacionales de financiación del desarrollo han establecido directrices o reglas de la contratación pública para la contratación financiada con sus fondos. En sus acuerdos de financiación o de préstamo con estos institutos y organismos, los países receptores se comprometen a respetar esas directrices o reglas en su contratación efectuada con cargo a dichos fondos. En los apartados a) y b) se da prelación a las obligaciones dimanantes de cualquier acuerdo internacional o de carácter intergubernamental, pero respetándose en todo lo demás el régimen de la Ley Modelo. Así pues, el artículo dispone en general que los tratados internacionales prevalecerán sobre las disposiciones de la Ley Modelo, aun sabiendo que los tratados internacionales pueden contener requisitos más estrictos; pese a ello, no deberían invocarse los compromisos internacionales como pretexto para eludir las salvaguardias básicas previstas en la Ley Modelo.

16. Los textos que en este artículo figuran entre paréntesis se refieren y van dirigidos a los Estados federales. El apartado c) faculta a todo Estado federal que adopte el régimen de la Ley Modelo para dar prioridad sobre ella a los acuerdos intergubernamentales relativos a cuestiones objeto de la Ley Modelo celebrados entre la administración federal y una o más subdivisiones del Estado, o entre dos o más de estas subdivisiones. Esa regla podrá también ser invocada por cualquier Estado cuyo órgano legislativo nacional no esté facultado para legislar para sus subdivisiones en la materia objeto de la Ley Modelo.

17. Las disposiciones del artículo deben adaptarse a los requisitos constitucionales del Estado promulgante. Por ejemplo, tal vez convendría enmendar la referencia que se hace en el apartado b) a los acuerdos concertados por el Estado, a fin de dejar claro que por “acuerdos concertados” se entenderán no los acuerdos que no solamente hayan sido firmados, sino también ratificados por el poder legislativo de modo que hayan pasado a ser vinculantes para el Estado promulgante.

18. El Estado promulgante no habrá de dar efecto a las disposiciones del artículo si plantean un conflicto con su derecho constitucional.

Artículo 4. Reglamento de la contratación pública [hyperlink**](#)**

19. La finalidad del artículo 4 es destacar la necesidad de que el reglamento de la contratación pública cumpla los objetivos y ponga en práctica las disposiciones de la Ley Modelo. Como ya se ha señalado en los párrafos ****** de las observaciones generales [**hyperlink**](#), la Ley Modelo es una “ley marco” que enuncia un régimen jurídico básico de la contratación pública destinado a ser complementado por un reglamento dictado por el órgano o la autoridad competente del Estado promulgante. El enfoque de la “ley marco” permite al Estado promulgante adaptar el régimen de esa ley, a medida que lo pormenoriza, a sus propias necesidades y circunstancias sin salirse del marco general en ella establecido. Por ello, varias disposiciones de la Ley Modelo indican expresamente que deberán complementarse con un reglamento de la contratación pública (véase más abajo ****** [**hyperlink**](#)) la lista de tales disposiciones). Además, el Estado promulgante puede decidir complementar también otras disposiciones de la Ley Modelo, aun cuando no hagan remisión expresa al reglamento de la contratación pública. En ambos casos, esa normativa no debería contradecir la Ley Modelo ni mermar la eficacia de sus disposiciones.

20. Toda referencia al “reglamento de la contratación pública” deberá interpretarse de conformidad con las tradiciones jurídicas del Estado promulgante; ese concepto puede abarcar cualquier instrumento que utilice el Estado promulgante para aplicar sus leyes. Esas tradiciones jurídicas pueden servir también para determinar qué cuestiones es habitual abordar mediante directrices *supra*. En la sección ****** del comentario general, en la introducción del presente capítulo [**hyperlinks**](#) y en el anexo ******, en el que se enumera una lista de los elementos de la Ley Modelo que está previsto que se complementen mediante reglamentos o directrices, figura un análisis de la importancia de que se adopte un criterio integral en los reglamentos, directrices y otros textos relativos a la aplicación para asegurar que el sistema previsto en la Ley Modelo funcione en la práctica [**hyperlink**](#).

21. Entre los principales ejemplos de trámites que convendría perfilar más en el reglamento de la contratación pública cabe citar los siguientes: el modo de publicación de diversos tipos de información (artículos 5, 6, 19 y 23 [**hyperlink**](#)); las medidas para garantizar la autenticidad, la integridad y la confidencialidad de la información comunicada durante el proceso de contratación (artículo 7 5) [**hyperlink**](#)); los motivos para limitar la participación en la contratación (artículo 8); el cálculo de los márgenes de preferencia y aplicación de criterios socioeconómicos en la evaluación de las ofertas (artículo 11 [**hyperlink**](#)); la estimación del valor de la contratación (artículo 12

[**hyperlink**]); el código de conducta (artículo 26 [**hyperlink**]); y la limitación de la cuantía del contrato adjudicado en casos de urgencia por el método de la negociación competitiva o el de la contratación con un solo proveedor (donde se limita la cantidad al nivel requerido para hacer frente a las circunstancias urgentes) (véase el comentario sobre las disposiciones pertinentes de los párrafos 4) y 5) del artículo 30 en los párrafos *infra* [**hyperlink**]).

22. Además de la utilización del reglamento como práctica óptima, la falta de una reglamentación de la contratación pública en algún punto en que la Ley Modelo remita a esa reglamentación podría privar a la entidad adjudicadora de la facultad requerida para adoptar alguna medida. Entre esos casos cabe citar: la limitación de la participación en el procedimiento de contratación (artículo 8 [**hyperlink**]); el permiso y demás trámites requeridos para otorgar un margen de preferencia a los proveedores o contratistas nacionales (artículo 11 [**hyperlink**]); y la utilización del método de la solicitud de cotizaciones, ya que este método de contratación solamente puede utilizarse para contratos de valor inferior al límite fijado para ello en el reglamento de la contratación pública (párrafo 2 del artículo 29 [**hyperlink**]).

Artículo 5. Publicación de textos jurídicos [hyperlink**]**

23. La finalidad del artículo 5 es asegurar la transparencia de todas las reglas y normas aplicables a la contratación en un Estado promulgante. Toda parte interesada debería saber qué reglas y normas son aplicables a la contratación en un momento dado y donde encontrarlas en caso necesario.

24. El párrafo 1) de este artículo está destinado a promover la transparencia en las leyes, reglamentos y demás textos jurídicos de aplicación general relativos a la contratación pública mediante el requisito de que esos textos jurídicos sean puestos sin demora a disposición del público y sean sistemáticamente actualizados. Como se pretende que los instrumentos sean de “aplicación general”, no se incluyen los documentos internos que puedan aplicarse a determinadas entidades adjudicadoras o grupos de estas. La inclusión de esa disposición se considera particularmente importante en los Estados en cuyo derecho administrativo no se contemple tal requisito. También puede resultar útil aun cuando exista el requisito, dado que la inclusión de una disposición en la propia ley de la contratación pública ayudaría a centrar la atención de las entidades adjudicadoras y de los proveedores o contratistas en el requisito de la difusión pública adecuada de los textos jurídicos a que se hace referencia en el párrafo.

25. En muchos países hay publicaciones oficiales en que se publican de ordinario los textos jurídicos a que se hace referencia en el párrafo. De otro modo, habría que poner los textos sin demora a disposición del público, incluidos los proveedores y contratistas extranjeros, por otro medio adecuado y de otra manera que garantizaran el nivel requerido de difusión de la información pertinente entre los receptores previstos y el público en general. A fin de asegurar un fácil y rápido acceso del público a los textos jurídicos pertinentes, el Estado promulgante tal vez desee especificar el modo y el medio de publicación en el reglamento de la contratación pública o bien mencionar en ese reglamento las fuentes jurídicas en que se trate de la publicidad de las leyes, reglamentos y demás actos públicos. Con ello se daría

certeza al público en general sobre la fuente de la información de que se trate, lo cual es especialmente importante habida cuenta de la proliferación de los medios y fuentes de información a medida que disminuye el uso de los medios tradicionales, con soporte de papel, de publicación de la información. La transparencia puede verse considerablemente menoscabada si se dispone de información abundante de muchas fuentes, de cuya autenticidad y autoridad tal vez no se tenga certeza.

26. El Estado promulgante debería prever el suministro de información pertinente de forma centralizada desde un lugar común (una “gaceta oficial” o un medio equivalente) y debería establecer normas en las que se definieran las relaciones de ese medio único centralizado con otros posibles medios en que podría figurar la misma información. La información anunciada en el medio único centralizado debería ser auténtica y de fuente autorizada y debería tener primacía con respecto a la información que pudiera divulgarse por otros medios. En los reglamentos cabría prohibir de manera explícita la publicación de la información en diferentes medios antes de su publicación en el medio centralizado, y cabría exigir que la misma información, publicada en diferentes medios, contuviera los mismos datos. El acceso al medio centralizado debería ser fácil y amplio. Sería idóneo que se diera acceso gratuito a las leyes, reglamentos y demás textos jurídicos de aplicación general relacionados con la contratación pública regulada por la presente Ley y a todas las eventuales enmiendas; la idea de cobrar derechos por ello iría en contra de los objetivos de la Ley Modelo de fomentar y alentar la competencia, promover la integridad y la confianza pública en el proceso de contratación y lograr la transparencia en los procedimientos de adjudicación.

27. En los reglamentos y en otras directrices pertinentes deberían explicarse las consecuencias que tendrían los requisitos de “acceso sin demora” y “actualización sistemática”, a saber, el anuncio y la actualización en su momento de toda información pertinente y esencial, de manera que resulte fácil de comprender y utilizar para el usuario normal. Debería destacarse la importancia del primer requisito (acceso sin demora del público a la información) habida cuenta de los efectos de la publicidad en la eficacia de las leyes, reglamentos y demás textos jurídicos de aplicación general: el derecho constitucional de los Estados suele requerir que transcurra un cierto número de días a partir de su publicación en la fuente pública de información oficialmente designada antes de que ese tipo de instrumentos entren en vigor.

28. El término “accesible” significa, al igual que en el artículo 7 de la Ley Modelo [\[**hyperlink**\]](#), donde también figura, que debe ser posible acceder a la información y leerla sin tener que recurrir a otra fuente de información (es decir, sin tener que solicitar acceso). Ello entraña que las autoridades designadas del Estado han de actuar con anticipación (por ejemplo, publicando información en los medios oficiales) a fin de que el público tenga acceso a esa información. (No incluye el requisito que figura en el artículo 7, en virtud del cual se exige que la información se presente de forma que pueda utilizarse para referencia posterior.) El requisito de la actualización sistemática significa que la autoridad designada del Estado ha de velar porque la información esté realmente actualizada y, por tanto, sea fiable: la forma en que se atienda esa obligación debe, a su vez, quedar documentada para que pueda comprobarse su cumplimiento.

29. El párrafo 2) del artículo trata sobre una determinada categoría de textos jurídicos: las decisiones judiciales y las resoluciones administrativas con fuerza para sentar un precedente y que no quedan dentro del ámbito del párrafo 1). Se ha incluido la frase inicial del párrafo 1) para dejar claro que los actos que se contemplan en el párrafo 2), a diferencia de los que se mencionan en el párrafo 1), por lo común entran en vigor a partir del momento en que son emitidos por el tribunal u otro órgano designado. A esos actos pueden aplicárseles las reglas especiales sobre el acceso del público: por ejemplo, es posible que el público tenga que dirigirse al tribunal correspondiente para solicitar una copia de un fallo judicial. El término “disponible” se utiliza, pues, en la medida de lo posible, tanto en relación con el acceso indirecto (solicitado) como con el acceso directo. Una vez se ha concedido el acceso a los actos de que se trate, sigue siendo necesario que la información sea legible y pueda interpretarse y recordarse (estos son los elementos de la “accesibilidad” examinados en los párrafos anteriores). Aunque el requisito de la actualización sistemática no se aplica a los actos contemplados en el párrafo 2), se alienta a los Estados promulgantes a que garanticen la exactitud de los textos publicados dentro de unos límites razonables de flexibilidad².

30. En función de las tradiciones jurídicas y de las prácticas de contratación pública de cada Estado promulgante, los textos interpretativos que tengan valor jurídico e importancia para los proveedores y contratistas pueden quedar dentro del ámbito del párrafo 1) o del párrafo 2) del artículo: entre esas cuestiones pueden citarse la interpretación de los elementos examinados en la introducción del capítulo I ([**hyperlink**]) y los elementos del glosario. El Estado promulgante tal vez desee plantearse la introducción de las enmiendas necesarias para asegurar que esos textos queden incluidos. Además, habida cuenta de que con los medios electrónicos de publicación de información se reducen los gastos, el tiempo y los esfuerzos que entraña poner la información a disposición del público y mantenerla actualizada, cabría considerar que la mejor práctica sería publicar otros textos jurídicos que sean de interés, de utilidad práctica y de importancia para los proveedores y contratistas, a fin de lograr transparencia y previsibilidad y de fomentar y alentar la competencia entre proveedores y contratistas.

31. Esos textos jurídicos adicionales podrían ser, por ejemplo, directrices o manuales para la contratación pública y otros documentos en que se proporcione información sobre aspectos importantes de las prácticas y los procedimientos nacionales de contratación pública y que puedan afectar a los derechos y obligaciones generales de los proveedores y contratistas. Si bien la Ley Modelo no aborda explícitamente la publicación de esos textos jurídicos, tampoco impide a ningún Estado promulgante la ampliación, de acuerdo con su contexto nacional, de la lista de los textos jurídicos contemplados en el artículo 5. Si ejerciese esa opción, el Estado promulgante debería examinar qué textos jurídicos suplementarios se han de poner a disposición del público y qué condiciones de publicación deberían aplicarse en ese caso. A ese respecto, los Estados promulgantes pueden evaluar los gastos y esfuerzos que entrañaría el cumplimiento de esas condiciones frente a los beneficios que se espera que los posibles receptores obtengan de la información

² El Grupo de Trabajo tal vez desee centrarse en determinar si la distinción entre “accesible” y “disponible” será suficientemente clara para el lector o si podría mejorarse la claridad incluyendo ejemplos, como el “acceso a través de medios como el sitio de un tribunal en Internet” (en el caso del término “disponible”).

publicada. En las comunicaciones sobre papel, los gastos podrían ser desproporcionadamente altos si, por ejemplo, se exigiera que también se pusiera con la mayor prontitud posible a disposición del público y se mantuviera sistemáticamente actualizada la información de interés marginal u ocasional para los proveedores y contratistas. Por la vía electrónica, aunque los gastos de la publicación de información pueden resultar insignificantes, los gastos de actualización de esa información, para asegurar un fácil acceso público a información pertinente y exacta, aún pueden ser cuantiosos.

32. Las leyes y reglamentos del Estado promulgante determinarán qué órganos estatales se encargarán del cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo. De conformidad con varias disposiciones de la Ley Modelo (como el artículo 39 t) [\[**hyperlink**\]](#)), se pedirá a la entidad adjudicadora que en el pliego de condiciones haga referencia a las leyes, reglamentos y demás textos jurídicos directamente pertinentes para el procedimiento de contratación.

Artículo 6. Información sobre contratos próximamente adjudicables [\[hyperlink**\]](#)**

33. La finalidad del artículo es destacar la importancia de una buena planificación de la contratación. El artículo recomienda que se publique información sobre los contratos adjudicables en el futuro, lo cual puede contribuir a la transparencia durante todo el proceso y eliminar cualquier ventaja indebida de proveedores o contratistas que puedan tener acceso a etapas de la planificación por alguna vía poco transparente.

34. El artículo 6 no requiere la publicación de esa información: las disposiciones son permisivas. La flexibilidad es necesaria porque la información y las necesidades pueden cambiar según las circunstancias; no solo podrían malgastarse el tiempo y los recursos de la entidad adjudicadora, sino que también los proveedores o contratistas podrían tener que hacer frente a costos innecesarios. La publicación de información abundante, irrelevante o equívoca, en lugar de una información pertinente, útil y cuidadosamente planificada, puede poner en peligro el propósito de la publicación de ese tipo de información. La entidad adjudicadora debería determinar si es apropiado proceder a tal publicación y si con ello se fomentaría la transparencia, en particular habida cuenta de los requisitos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (su artículo 9, que aborda la contratación pública). De forma similar, también se alienta la publicación de planes de contratación pública con el horizonte de unos meses, con sujeción a esas precauciones.

35. El párrafo 1) del artículo permite y trata de fomentar la publicación de información sobre las oportunidades de contratos próximamente adjudicables y sobre los planes de contratación pública. El párrafo 1) se refiere a los planes generales a largo plazo, más que a la información sobre las oportunidades de contratación a corto plazo o sobre oportunidades concretas de contratos próximamente adjudicables (esto último se regula en el párrafo 2) del artículo). El Estado promulgante puede considerar apropiado destacar las ventajas de que se publique esa información para la planificación estratégica y operativa. Por ejemplo, con la publicación de esa información las entidades adjudicadoras pueden planificar

con mayor disciplina su contratación pública, con lo cual pueden disminuir los casos de adjudicación “especial” y “de emergencia” y, por consiguiente, los de empleo de métodos de contratación pública menos competitivos. Asimismo, puede incrementar la competencia al permitirse que un mayor número de proveedores y contratistas tenga conocimiento de las oportunidades existentes de contratación pública, evalúe su interés en participar y, en consecuencia, planifique su participación con suficiente antelación. La publicación de esa información también puede tener efectos positivos en el contexto más amplio de la buena administración de los asuntos públicos, en particular al someter la contratación pública a un examen público general y al permitir que la comunidad local participe en ella.

36. Los Estados promulgantes pueden ofrecer incentivos para la publicación de esa información, como ya se hace en algunos ordenamientos jurídicos, por ejemplo, reduciendo el plazo para la presentación de ofertas en los casos en que la contratación pública se haya dado a conocer por adelantado. Los Estados promulgantes también podrán hacer referencia a los casos en que la publicación de esa información sea particularmente conveniente, como cuando se prevea una contratación pública compleja de obras o cuando el valor de la contratación pública supere un determinado límite. Asimismo, podrán recomendar el contenido deseable de la información que haya de publicarse y señalar otras condiciones de publicación, por ejemplo, fijando el período que ha de abarcar esa publicación, que podría ser de medio año, de un año o de otra duración.

37. A diferencia del párrafo 1), el párrafo 2) menciona el anuncio previo de un contrato próximamente adjudicable. En la práctica, esos anuncios previos pueden ser útiles, por ejemplo, para tantear el mercado y determinar, antes de iniciar un procedimiento de contratación, si los posibles candidatos podrían satisfacer las necesidades de la entidad adjudicadora. Este tipo de investigación del mercado puede resultar útil en los mercados que evolucionan rápidamente (como el del sector de la tecnología informática), concretamente para determinar si existen o se prevén soluciones innovadoras. A través de las respuestas dadas al aviso previo, la entidad adjudicadora podría averiguar si resultaría o no viable o conveniente llevar a cabo la contratación del modo planeado. Con los datos obtenidos, la entidad adjudicadora podrá adoptar una decisión, con mayor conocimiento de causa, sobre el método de contratación que resulte más apropiado adoptar en el procedimiento previsto. Este aviso previo no debe confundirse con el anuncio que suele publicarse en relación con los procedimientos de solicitud de propuestas por el que se solicitan manifestaciones de interés (ese anuncio se analiza más detalladamente en ...).

38. La publicación facultativa que se menciona en los párrafos 1) y 2) no se ha concebido como parte de un determinado procedimiento de contratación. La publicación en virtud del párrafo 1) constituye un paso en un plan a mediano o largo plazo, mientras que la publicación en virtud del párrafo 2) puede realizarse inmediatamente antes del procedimiento de contratación. Tal como se indica en el párrafo 3) del artículo, la información publicada de conformidad con los párrafos 1) o 2) no será en modo alguno vinculante para la entidad adjudicadora, ni siquiera respecto de futuras convocatorias. Los proveedores o contratistas no tendrán ningún derecho de recurso si no se produce la contratación pública anunciada o si se produce en condiciones diferentes de las indicadas en el anuncio previo.

39. Este artículo es de aplicación general; se alienta a la entidad adjudicadora a publicar la información mencionada en los párrafos 1) y 2) independientemente del tipo y método de contratación que se prevea. No obstante, los Estados promulgantes deberían tener presente que no siempre es aconsejable publicar esa información. Imponer el requisito de publicar este tipo de información puede resultar engorroso; además, ese anuncio puede obstaculizar el proceso presupuestario y mermar la flexibilidad que precisa la entidad adjudicadora para organizarse en función de sus necesidades de contratación. La publicación de tal información podría también propiciar la colusión y las presiones en favor de un determinado candidato. Por consiguiente, tal como se refleja en el artículo, la Ley Modelo da a la entidad adjudicadora el poder discrecional de decidir caso por caso sobre si debe o no publicarse tal información, pero se considera que, a menos que otras consideraciones aconsejen lo contrario, debería publicarse.

40. El Estado promulgante tal vez desee especificar, en su reglamento de la contratación pública, el lugar y los medios de publicación de la información mencionada en el artículo. Al regular esta cuestión, tal vez desee tener en cuenta el comentario sobre el artículo 5, que plantea consideraciones de interés para el artículo 6. Debería velarse por la coherencia en la reglamentación de lo relativo a la publicación, en el marco de la Ley Modelo, de todos los tipos de información relacionada con la contratación pública (véase también, en este contexto, el comentario sobre los artículos 18, 19, 23 y 33 a 35 *infra* [\[**hyperlink**\]](#)).

Artículo 7. Comunicaciones consignadas durante la contratación **[\[**hyperlink**\]](#)**

41. La finalidad del artículo 7 es tratar de ofrecer certeza en lo relativo a: i) la forma de la información que se generará y comunicará durante el proceso de contratación pública con arreglo a la Ley Modelo; ii) los medios que se utilizarán para comunicar esa información; iii) los medios para cumplir todos los requisitos de que la información conste por escrito o que esté firmada y para celebrar cualquier reunión de proveedores o contratistas (denominado colectivamente “forma y medios de las comunicaciones”); y iv) los requisitos previstos y las medidas adoptadas para proteger la información de carácter reservado en los procedimientos de contratación en que se disponga de tal información.

42. Respecto de las formas y los medios de comunicación, la posición de la Ley Modelo en lo que respecta a la interacción de la entidad adjudicadora con los proveedores y contratistas y con el público en general es que el objetivo primordial debe consistir en tratar de fomentar y alentar la participación de los proveedores y contratistas en el proceso de contratación pública, sin obstaculizar la evolución de la tecnología y de los procesos. Por ello, las disposiciones enunciadas en el artículo no dependen de la utilización de ninguna tecnología concreta, ni la presuponen. Con ellas se establece un régimen jurídico abierto a los adelantos tecnológicos. Las disposiciones, si bien deben interpretarse de forma amplia y abarcan todas las comunicaciones que se utilizan durante el proceso de contratación pública previsto en la Ley Modelo, no están destinadas a reglamentar las comunicaciones que pueden estar sujetas a otras ramas del derecho, como las garantías de las ofertas.

43. En el párrafo 1) del artículo se establece que la información deberá revestir una forma que deje constancia del contenido de la información y que sea accesible para que pueda utilizarse en ulteriores consultas. En el párrafo, la palabra “accesible” se emplea en el sentido de que el lector tiene acceso directo a la información de que se trate, que deberá ser también de fácil lectura y susceptible de interpretación y retención. La palabra “usable” empleada en la versión inglesa abarca tanto la utilización humana como el procesamiento automático. El objetivo de esas disposiciones es brindar, por una parte, suficiente flexibilidad en la utilización de diversas formas de información al evolucionar la tecnología y, por otra, ofrecer suficientes salvaguardias de que la información, cualquiera que sea la forma en que se genere y comunique, podrá utilizarse con fiabilidad, establecerse su origen y verificarse. Los requisitos de que la información pueda utilizarse con fiabilidad, establecerse su origen y verificarse son esenciales para el funcionamiento normal del proceso de contratación pública, para la eficacia del control y la auditoría y para los procedimientos de revisión. El enunciado del artículo es compatible con los requisitos de forma que figuran en los textos de la CNUDMI por los que se regula el comercio electrónico, como el párrafo 2) del artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales [\[**hyperlink**\]](#). Al igual que en ese documento, en la Ley Modelo no se confiere carácter permanente a ninguna forma particular de información ni se interfiere en la aplicación de las reglas de derecho que puedan requerir una forma concreta. Para los fines de la Ley Modelo, mientras se deje constancia del contenido de la información y la información sea accesible para ulteriores consultas, podrá utilizarse cualquier forma de información. A fin de asegurar la transparencia y la previsibilidad, la entidad adjudicadora tendrá que especificar, al comienzo del proceso de contratación pública, cualquier requisito acerca de la forma aceptable para esa entidad, de conformidad con el apartado a) del párrafo 3) del artículo.

44. El párrafo 2) del artículo contiene una excepción al requisito general sobre la forma enunciado en el párrafo 1). Esa excepción permite que ciertos tipos de información se comuniquen de forma preliminar por un medio que no deje constancia de la información transmitida, por ejemplo, comunicando la información verbalmente o por teléfono o en una reunión personal, evitando así demoras innecesarias a la entidad adjudicadora y a los proveedores y contratistas. En el párrafo se enumeran, remitiendo a las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo, los casos en que se puede aplicar esa excepción. Esos casos entrañan la comunicación de información a cualquier proveedor o contratista que participe en el proceso de contratación pública (por ejemplo, cuando la entidad adjudicadora pide a los proveedores o contratistas aclaraciones sobre sus ofertas). Sin embargo, la excepción está sujeta a una condición, a saber, que se dé confirmación inmediata al receptor del mensaje de una forma que deje constancia de su contenido, como prescribe el párrafo 1) del artículo (es decir, que deje constancia del contenido de la información y que sea accesible y utilizable). Este requisito es esencial para asegurar la transparencia, la integridad y el tratamiento justo y equitativo de todos los proveedores y contratistas en el proceso de contratación pública. No obstante, puede haber dificultades prácticas para verificar el cumplimiento del requisito y para hacerlo cumplir. Por ello, el Estado promulgante tal vez desee limitar el alcance de la excepción tal como está redactada en el párrafo 2) de manera que se contemplen solo las situaciones estrictamente necesarias a la luz de las prácticas

comerciales reinantes en el Estado de que se trate. El recurso excesivo a esta excepción podría entrañar riesgos de abuso, e incluso propiciar la corrupción y el favoritismo.

45. El párrafo 3) del artículo, ateniéndose al criterio general de la Ley Modelo conforme al cual la entidad adjudicadora se encarga de la organización del procedimiento de contratación, confiere a esa entidad el derecho a insistir en que se utilice una forma y un medio de comunicación en particular o en que se combinen formas y medios durante el proceso de contratación sin tener que justificar su decisión. No se concede tal derecho a los proveedores o contratistas que, no obstante, pueden, de conformidad con el capítulo VIII de la Ley Modelo [\[**hyperlink**\]](#), impugnar la decisión de la entidad adjudicadora a ese respecto. El ejercicio de ese derecho por la entidad adjudicadora está sujeto a varias condiciones cuyo objetivo es impedir que la entidad utilice la tecnología y los procesos con fines discriminatorios o en general de manera excluyente, por ejemplo, impidiendo a algunos proveedores y contratistas el acceso al proceso de contratación pública u obstaculizando su participación en él.

46. A fin de garantizar la previsibilidad y un examen, un control y una auditoría adecuados, en el párrafo 3) del artículo se exige a la entidad adjudicadora que, al solicitar por primera vez la participación de proveedores o contratistas en el proceso de contratación, especifique cualquier requisito de forma, así como los medios que se utilizarán para comunicar información en un determinado proceso de contratación. Estos requisitos podrán modificarse publicando un suplemento de la información inicialmente anunciada, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Modelo. La entidad adjudicadora debe dejar claro si podrán utilizarse una o varias formas y uno o varios medios para comunicar información y, en caso de que se puedan utilizar varios, qué forma y qué medio deberá emplearse en cada etapa del proceso de contratación y respecto de qué tipos o clases de información o medidas. Pueden estar justificadas, por ejemplo, algunas disposiciones especiales para presentar dibujos técnicos complejos o muestras, o para efectuar copias de seguridad adecuadas cuando exista el riesgo de que se pierdan los datos si se presentan únicamente de una sola forma o por un solo medio. Al principio del proceso de contratación, la entidad adjudicadora puede prever la posibilidad de modificar los requisitos de forma o los medios de comunicación requeridos. Esa situación puede darse, por ejemplo, en procesos de contratación que vayan a prolongarse durante un período relativamente largo, tales como los de contratación de bienes de gran complejidad o las contrataciones con arreglo a acuerdos marco. En tal caso, la entidad adjudicadora, además de reservarse la posibilidad de modificar los requisitos de forma o los medios de comunicación cuando solicite por primera vez la participación de proveedores o contratistas en el proceso de contratación, estará obligada a asegurar el respeto de las salvaguardias enunciadas en el párrafo 4) del artículo 7 cuando elija una nueva forma o un nuevo medio de comunicación y a notificar sin demora el cambio a todos los interesados. Si bien teóricamente será posible, la utilización de varios medios de comunicación, o el aviso de que los medios de comunicación podrán modificarse libremente durante el procedimiento, repercutirán negativamente, con casi total seguridad, tanto en la eficacia del procedimiento de adjudicación como en la validez de la información relativa a los medios de comunicación. Por consiguiente, las entidades adjudicadoras deberían establecer únicamente los medios de comunicación y las

correspondientes modificaciones que fueran justificables y que de antemano se consideren apropiados para el proceso de que se trate.

47. Para dar verdadero significado al derecho a poder participar en procesos de contratación de conformidad con la Ley Modelo, en el párrafo 4) del artículo se exige que los medios mencionados de acuerdo con el párrafo 3) deberán poder ser fácilmente utilizados junto con los que habitualmente emplean los proveedores o contratistas en el contexto de que se trate. En cuanto a los medios que deben utilizarse para celebrar reuniones, en ese mismo párrafo se exige también que se garantice que los proveedores o contratistas puedan participar plena y simultáneamente en la reunión. “Plena y simultáneamente” significa en este contexto que los proveedores y contratistas que participen en la reunión deben poder seguir en tiempo real todos los actos de la reunión e intervenir frente a otros participantes, si es necesario. El requisito de “medios de comunicación habitualmente empleados por los proveedores o contratistas”, que aparece en el párrafo 4) del artículo, entraña una conectividad y una interoperabilidad eficaces y asequibles (es decir deben contar con la capacidad de funcionar juntos eficazmente), para asegurar un acceso sin restricciones al proceso de contratación. En otras palabras, cualquier posible proveedor o contratista debería poder participar en el proceso de contratación de que se trate con un equipo sencillo y de uso común y disponiendo de conocimientos técnicos básicos. No obstante, ello no debería interpretarse en el sentido de que los sistemas de información de las entidades adjudicadoras deben ser mutuamente compatibles con los de todos y cada uno de los proveedores o contratistas. Pero si el medio elegido por la entidad adjudicadora supone la utilización de sistemas de información que no son generalmente accesibles, ni fáciles de instalar (en su caso) ni razonablemente sencillos de utilizar, o cuyos costos son excesivamente altos para el uso previsto, no podrá considerarse que ese medio satisface el requisito de ser de uso habitual en el contexto de un proceso de contratación concreto, conforme al párrafo 4) del artículo. (Por “sistema de información” o “el sistema” se entenderá, en este contexto, toda la gama de medios técnicos empleados para las comunicaciones. En función de cada situación, podrá hacer referencia a una red de comunicaciones, a aplicaciones y normas o, en otros casos, a tecnologías, equipo, buzones o instrumentos.)

48. Con dicho párrafo no se pretende garantizar el acceso sencillo y rápido a la contratación pública en general, sino a un proceso de contratación concreto. La entidad adjudicadora tendrá que decidir en cada caso qué medio de comunicar la información podrá ser el adecuado para cada tipo de contratación. Por ejemplo, el grado de implantación de ciertas tecnologías, aplicaciones y medios conexos de comunicación puede variar de un sector a otro de una determinada economía. Además, la entidad adjudicadora deberá tener en cuenta factores como el ámbito geográfico de la contratación, la cobertura y la capacidad de la infraestructura del sistema de información del país, el número de trámites y procedimientos que deberán efectuarse para que tengan lugar las comunicaciones, el nivel de complejidad de esos trámites y esos procedimientos, los conocimientos de informática que se esperan de los posibles proveedores o contratistas, los costos a los que se habrá que hacer frente y el tiempo que se empleará. Cuando no se imponga limitación alguna a la participación en los procedimientos de contratación en función de la nacionalidad, la entidad adjudicadora también deberá evaluar cómo repercutirá el medio escogido en la posibilidad de que los proveedores o contratistas extranjeros puedan participar en el proceso. También debería tenerse en cuenta todo

requisito pertinente enunciado en acuerdos internacionales. Con un enfoque pragmático y basado en la obligación de la entidad adjudicadora de no limitar el acceso a la contratación a posibles proveedores y contratistas se la ayudará a decidir si el medio elegido es de uso habitual en el contexto de una contratación concreta y, por tanto, si satisface el requisito enunciado en el párrafo.
